

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS No. 388/2018
DENUNCIANTE: [REDACTED]

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
P R E S E N T E.-

[REDACTED] de generales conocidas como denunciante en el expediente de la Contradicción de Criterios (antes Contradicción de Tesis) al rubro indicada, ante usted, respetuosamente, comparezco y expongo:

En términos de los artículos 13 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito se dicte auto en el presente procedimiento de Contradicción de Criterios en el que se exprese el motivo del excesivo rezago y denegación a la resolución del presente asunto; así también, exprese todos y cada uno de los asuntos relativos a la Contradicción de Criterios de expedientes del año 2018 iniciados con posterioridad al 388/2018, los expedientes de Contradicción de Criterios de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, que han sido resueltos y la motivación de la resolución previa a la del presente asunto rezagado.

Así también, en términos de los artículos 13, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se expresen en el proyecto de resolución que la ponencia emita con relación a la presente Contradicción de Criterios, sostenga el criterio sostenido en el Voto Concurrente relativo al juicio de amparo en revisión 706/2015, siendo ineludible atender al PRECEDENTE en el voto concurrente, o en su caso, ha de aclararse de manera reforzada la diferenciación de su postura ante la reparación integral a la violación de los derechos humanos, lo anterior en aplicación de la Tesis de Jurisprudencia 125/2017, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 121, que dice:

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control

del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o., apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

Es deber del órgano jurisdiccional atender al precedente y resolver en cumplimiento al <Derecho de Igualdad> de los quejosos, para que se sostenga de igual manera, el derecho a la reparación integral a la violación a los derechos humanos.

En términos del artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los principios I, numeral 2, inciso c); II, numeral 3, incisos c) y d); VIII, numeral 14; y, IX numeral 15, 18 y 20 de la resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, que aprueba los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones; y los artículos 8, 25 y 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, solicito disponga las MEDIDAS NECESARIAS Y URGENTES para la efectividad del derecho fundamental a la REPARACIÓN DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2011 en materia de derechos humanos, reconoció desde el texto del artículo primero, que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte; el párrafo tercero establece que todas las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y REPARAR las violaciones a los derechos humanos.

El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos, establecen el derecho a un

recurso a las víctimas de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos.

La resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, que aprueba los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. En los principios I, numeral 2, inciso c); II, numeral 3, incisos c) y d); VIII, numeral 14; y, IX numeral 15, 18 y 20; ordenan disponer para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos, que incluyan la REPARACIÓN plena y efectiva, en las formas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

No excluye al Poder Judicial de la Federación, todas las autoridades mexicanas, en el ejercicio de sus funciones, tienen el deber de hacer efectivo el derecho fundamental de la REPARACIÓN. Abarca el deber a los Ministros, Magistrados y Jueces a proveer a la efectiva REPARACIÓN de los derechos de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, de ahí la relevancia del Criterio Unificador en el cumplimiento al derecho humano a la reparación integral de la violación a los derechos humanos.

Los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la libertad, a la justicia, están vinculados en su eficacia a la REPARACIÓN. La reparación integral se reconoce como un aspecto fundamental para restablecer la dignidad de las víctimas y garantizar el ejercicio efectivo o reparación de otros derechos, como el de la vida, la integridad física, la salud y/o acceso a la justicia.

Solicito copia certificada por duplicado de la presente solicitud y la resolución que recaiga a la presente, para su ofrecimiento como elemento de prueba ante la instancia internacional de derechos humanos.

Por lo expuesto pido:

PRIMERO: Se tenga a la parte denunciante solicitando la información de los motivos del rezago y denegación a la resolución de la presente Contradicción de Criterios.

SEGUNDO: Se cumpla el derecho de igualdad de los quejosos y se atienda al precedente del voto concurrente del ministro ponente.

TERCERO: Se reconozca el derecho al juicio de amparo como un recurso efectivo para la reparación a la violación a los derechos humanos, se cumpla con las

medidas y procedimientos que den un acceso al recurso de AMPARO, como INSTRUMENTO DE REPARACIÓN.

CUARTO: Solicito la apertura del expediente electrónico y acceso al mismo a los usuarios **allopvaldes** y **egarza90**; y a su vez se tenga por autorizado para imponerse de las actuaciones del expediente en cuestión al licenciado [REDACTED], así como para oír y recibir notificaciones.

QUINTO: Solicito certificación del presente documento, así como de la resolución que recaiga a la presente, las medidas y acciones que deriven de la presente solicitud, para su ofrecimiento ante el órgano internacional de derechos humanos y Relator Especial; autorizando su entrega el profesionista de mérito.

PROTESTO A USTED MIS RESPETOS
San Pedro Garza García, N. L. a 20 de Septiembre de 2022.

[REDACTED]

5930e5615d7ce6195dbcf55a3b98a1fc31b55e3ad1c7ceb207469c4a0b6d7a10

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

5930e5615d7ce6195dbcf55a3b98a1fc31b55e3ad1c7ceb207469c4a0b6d7a10